

[Imprimir Página Web](#)

¿Un presidente colombiano llamado Álvaro Uribe Vélez?

Román D. Ortiz

ARI Nº 6-2002 - 15.4.2002

En seis meses, el independiente Álvaro Uribe Vélez ha pasado de ser un candidato presidencial casi testimonial a convertirse en el aspirante prácticamente seguro a relevar al actual jefe del Estado, Andrés Pastrana, cuando éste deje su cargo el próximo mes de agosto. El ascenso de Uribe ha sido fulgurante. Hasta mediados del año 2001, este antiguo miembro del partido liberal convertido en candidato independiente disfrutó de un apoyo cercano al 15% del electorado. En septiembre de ese año, dio las primeras señales de ascenso electoral al situarse como segundo en las preferencias de los colombianos, con un 23,4% de intención de voto. Cuatro meses después, en enero de 2002, ya encabezaba las encuestas con un 39%. Finalmente, la última macroencuesta realizada el pasado marzo le otorgaba un respaldo del 59,5% a más de 35 puntos de su más directo rival, el candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa.

La explicación de este rápido crecimiento electoral descansa en la trayectoria reciente del conflicto colombiano. Desde el inicio de su campaña, Uribe se ha presentado como un partidario del endurecimiento de la política del Estado colombiano frente a las guerrillas de las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- y el ELN –Ejército de Liberación Nacional- que operan en el país andino desde hace casi cuatro décadas. El candidato presidencial siempre criticó las erráticas conversaciones mantenidas por el presidente Pastrana con los insurgentes y enfatizó la posibilidad de derrotarlos por la vía militar. A medida que el proceso de paz con los rebeldes dio muestras de parálisis y la crisis de seguridad del país andino continuó agravándose, facciones crecientes de la opinión pública colombiana comenzaron a ver con simpatía la “mano dura” propuesta por Uribe. En particular, el apoyo a estas posiciones se extendió entre unas clases medias urbanas castigadas por los 3.000 secuestros anuales registrados en el país y asfixiadas por el deterioro de la economía como consecuencia del conflicto armado. A mediados del pasado mes de enero, la ruptura de las conversaciones de la administración Pastrana con las FARC y la intensificación de las acciones guerrilleras contra las ciudades jugaron definitivamente a favor de Uribe para convertirle en el candidato predilecto de los colombianos.

El programa de gobierno de Uribe se centra en dos ejes: seguridad y reforma política. En el primer ámbito, quiere ampliar los efectivos del Ejército y la Policía al mismo tiempo que implica masivamente a la población civil en la lucha contrainsurgente creando milicias responsables de tareas de vigilancia y recogida de información. En el terreno de los cambios institucionales, busca reforzar el poder ejecutivo, reducir el Congreso a una única cámara de pequeño tamaño, simplificar los mecanismos judiciales, reducir la burocracia de las entidades territoriales colombianas (departamentos y municipios) y recortar los niveles de gasto destinados al sostenimiento del aparato político. Estos paquetes de medidas están inspirados en la experiencia de Uribe primero como alcalde de Medellín (1982-1984) y luego en calidad de gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997).

Vínculos con la extrema derecha

Las promesas electorales de endurecimiento de la seguridad y reforma del sistema político han alimentado temores de que el proyecto de Uribe Vélez oculte un trasfondo autoritario. Estas reticencias se nutren de la trayectoria del candidato como gobernador de Antioquia. Durante su período en este cargo, Uribe promovió la creación de cooperativas privadas de seguridad (CONVIVIR) como un instrumento para la lucha contrainsurgente. Estos grupos se convirtieron en un vivero para la expansión del movimiento paramilitar responsable de emplear tácticas de “guerra sucia” contra la guerrilla y mantener vínculos con el narcotráfico. En particular, las CONVIVIR facilitaron la consolidación de una extensa estructura paramilitar liderada por Carlos Castaño bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para sus oponentes, Uribe se alió con los paramilitares para sostener una guerra total contra los rebeldes izquierdistas durante su etapa como gobernador de Antioquia y pretende repetir esta misma estrategia a escala nacional si conquista la presidencia.

Con el fin de desactivar estas críticas y ganar el voto de los sectores moderados del electorado, Uribe ha desarrollado una estrategia destinada a reforzar su imagen de candidato apegado a la institucionalidad. Con este fin, ha incorporando dentro de su candidatura a Francisco “Pacho” Santos en calidad de aspirante a la vicepresidencia. Este periodista, perteneciente a la familia propietaria del diario El Tiempo, tiene una larga trayectoria como promotor de respuestas civiles pacíficas a la violencia. Además, hasta su salida de Colombia por amenazas de las FARC, era considerado como una figura bien relacionada con las organizaciones guerrilleras. En este sentido, el acercamiento a Santos ha reforzado la respetabilidad de Uribe.

Por otra parte, el candidato presidencial ha moderado el tono de su discurso político. Si al inicio de su campaña la meta declarada era organizar una milicia civil de un millón de hombres para derrotar militarmente la insurgencia, hoy se trata de conseguir la colaboración ciudadana para disuadir a los rebeldes de continuar con la violencia. Un cambio de tono que resulta del agrado de los votantes menos radicales. Por último, Uribe ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación nacionales e internacionales la falsedad de las acusaciones que le vinculan a paramilitares y narcotraficantes.

Pese a estas insistentes negativas, lo cierto es que existen numerosos rumores de que el candidato mantuvo

contactos con los paramilitares durante la etapa en que asumió el cargo de gobernador del departamento de Antioquia. Además, algunos de sus colaboradores cercanos, como el secretario de la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, fue vinculado a la organización de grupos paramilitares y el tráfico de narcóticos. De hecho, se ha apuntado la cercanía de Moreno al grupo que está desarrollando la campaña presidencial de Uribe. Estos indicios dan verosimilitud a las advertencias de sectores opuestos al candidato en el sentido de que un gobierno bajo su presidencia sería condescendiente con la violencia paramilitar y podría estar tentado de trabar una alianza con estos grupos para derrotar a los rebeldes izquierdistas.

En cualquier caso, no resulta probable que estas acusaciones lleguen a tener suficiente peso sobre la opinión pública colombiana como para convertirse en un obstáculo en la carrera política de Uribe. De hecho, parece que únicamente un atentado contra su vida, como el planeado por las FARC durante la visita del candidato a Madrid a principios de abril o el realizado recientemente en Barranquilla, podría frenar su ascenso al poder. A salvo de tales eventualidades, es seguro que Uribe conquistará la presidencia de Colombia con un respaldo popular con escasos precedentes en la historia política del país andino.

Las consecuencias de un triunfo de Uribe

Los planes del candidato en el ámbito de la seguridad pueden alterar el rumbo del conflicto colombiano. Su propuesta de implicar a los civiles en la lucha contrainsurgente promete asestar un golpe decisivo a la guerrilla. Gracias al respaldo de Washington, el Ejército colombiano ha conseguido reunir una combinación de inteligencia, movilidad y potencia de fuego que le ha permitido frustrar la mayoría de las grandes operaciones lanzadas por la guerrilla desde 1999. Bajo estas circunstancias, los insurgentes han reorientado sus operaciones hacia el hostigamiento a pequeña escala de las fuerzas de seguridad, la destrucción de la infraestructura económica y el terrorismo urbano. Una densa red de milicias civiles como la propuesta por Uribe frenará la infiltración guerrillera en pueblos y ciudades al mismo tiempo que crea un entorno hostil para el desarrollo de las actividades insurgentes. El resultado puede ser un rápido debilitamiento de las organizaciones armadas izquierdistas y, muy particularmente, de las FARC.

En cualquier caso, la política de seguridad de Uribe también puede tener otros efectos poco deseables. Con independencia de las verdaderas intenciones de su gobierno, es muy probable que la proliferación de grupos privados de autodefensa desemboque en un fortalecimiento del movimiento paramilitar. Esta tendencia vendría acompañada de un estrechamiento de los nexos de estos grupos de extrema derecha con las fuerzas armadas y otros sectores del aparato estatal colombiano. Bajo tales circunstancias, se haría inevitable la multiplicación de las violaciones de los derechos humanos y la extensión de la corrupción asociada al narcotráfico. Además, este recrudecimiento del conflicto bloquearía cualquier posibilidad de acuerdo negociado entre el gobierno y los sectores de la guerrilla menos intransigentes. De hecho, resulta difícil imaginar cómo podrán avanzar las conversaciones actualmente en curso entre la administración Pastrana y el ELN bajo un hipotético gobierno presidido por Uribe que apueste por una campaña contrainsurgente sin restricciones. A la vista de todo esto, parece seguro que una probable alianza entre elementos del gobierno y bandas paramilitares debilitará sustancialmente a la guerrilla; pero sólo a costa de quebrar la legitimidad del gobierno colombiano y hundir la respetabilidad internacional de la república andina.

Frente a estas perspectivas, la administración estadounidense parece mantener una posición ambigua. Los analistas del Pentágono sobre el conflicto colombiano coinciden en señalar la necesidad de implicar a los civiles en la lucha contrainsurgente como mejor alternativa para derrotar a la guerrilla. Pero, incluso después del 11 de septiembre, la administración Bush se ha mostrado sensible a las críticas contra un énfasis en la lucha antiterrorista que ignore los derechos humanos. En este contexto, no es fácil que Washington pueda mantener un apoyo incondicional a Bogotá si la llegada de Uribe a la presidencia significa un reforzamiento de los vínculos del Ejército colombiano con los paramilitares y una extensión de "guerra sucia" contra la guerrilla. Además, es previsible que el nuevo presidente opte por intensificar la lucha contrainsurgente dejando en segundo plano unas operaciones antidroga que complican la planificación militar de Bogotá e irritan a los grupos paramilitares. Semejante giro estratégico podría abrir una crisis en las relaciones de la administración Uribe con la Casa Blanca.

Además de este deterioro de las relaciones con Washington, la política de seguridad propuesta por Uribe también puede generar tensiones con algunos inversores internacionales presentes en Colombia. Hasta el momento, ciertas multinacionales han ignorado los llamamientos de las autoridades colombianas para que se resistan a las extorsiones de la guerrilla. Muy al contrario, se ha hecho frecuente que las corporaciones extranjeras compren paz para sus negocios a cambio de ingresos en los cofres de los insurgentes. Uribe ya ha dado muestras de apostar por una política de "tolerancia cero" para evitar que las multinacionales se conviertan en financiadores de la guerrilla. De hecho, como gobernador de Antioquia, ordenó la detención del agente alemán Werner Mauss tras su participación en el pago de un rescate a cambio de la liberación de un ejecutivo de una empresa germana secuestrado por el ELN. Este antecedente parece subrayar que la voluntad de Uribe de cortar los canales de financiación de la guerrilla puede traer aparejados roces con algunas empresas extranjeras implantadas en el país andino.

El futuro de la posición española

La previsible llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia obligará a una revisión de la política de España hacia Colombia. En los últimos años, la administración española ha respaldado los esfuerzos del gobierno Pastrana para encontrar una salida negociada al conflicto del país andino. Para ello, Madrid asumió una posición de mediación entre las autoridades de Bogotá y los grupos insurgentes. Esta concepción del papel español fue un reflejo de la experiencia adquirida en la resolución de los conflictos centroamericanos durante los años ochenta. Allí, España escogió el papel de "hombre bueno" como vía para conseguir una notable influencia en la región evitando los costes de alinearse con cualquiera de los bandos enfrentados en las guerras civiles de Nicaragua o El Salvador. Al margen

de las diferencias entre uno y otro escenario, la diplomacia española se ha esforzado en repetir en Colombia la estrategia utilizada con éxito en América Central.

La continuación de esta línea política resultará imposible si Uribe alcanza la presidencia con un programa que apuesta por la represión militar de la guerrilla relegando a un segundo plano la búsqueda de una solución negociada al conflicto. Esta nueva estrategia del gobierno de Bogotá puede conseguir el debilitamiento de la insurgencia; pero también provocar el fortalecimiento del paramilitarismo y la extensión del narcotráfico. En este contexto, el papel de España como mediador perderá parte de su sentido en la medida en que gobierno y guerrilla reducirán su interés en buscar una solución dialogada a la guerra y apostarán por una escalada bélica.

El previsible triunfo electoral de Uribe obliga, por tanto, a un replanteamiento de la posición española en el país andino que podría materializarse en la sustitución de la actual política de "hombre bueno" por otra orientación a la que cabría denominar "apoyo crítico". Dentro de esta nueva aproximación, Madrid podría ofrecer a la administración Uribe un respaldo limitado en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad en Colombia a la vez que se influye sobre las nuevas autoridades para frenar posibles excesos contra los derechos humanos o estimular la lucha contra la corrupción. De este modo, España fortalecería sus vínculos con el nuevo presidente sin comprometerse en aquéllas de sus políticas con potenciales consecuencias peligrosas para el futuro de la democracia en Colombia. Sería una vía para adaptar la política española a lo que parece un giro inevitable en el escenario estratégico colombiano.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© Fundación Real Instituto Elcano 2011

[Subir ▲](#)